

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020)

REF: 110014003010-2020-00399-00

Se procede a decidir la **ACCIÓN DE TUTELA** instaurada por **PATRICIA MARTÍNEZ GAMARRA** contra **CARLOS EDWIN HERRERA ORTIZ (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO BOSQUES II)**.

I. ANTECEDENTES

1. Patricia Martínez Gamarra, solicitó el amparo de su derecho fundamentales de «*petición*» que consideró vulnerado por la parte accionada.

2. Como soporte a su pedimento, alegó los siguientes hechos:

2.1 Señaló que el 27 de junio de 2020 se celebró, de manera virtual, la asamblea general de copropietarios del Edificio Bosques II, pero, al momento en que iba a acceder a la misma a través de link compartido para tales efectos, su acceso estaba restringido, por lo que solicitó ayuda al administrador de la copropiedad y al presidente del consejo de administración, sin que le hubieran prestado su colaboración.

2.2 Ante lo sucedido el 30 de junio de 2020 radicó ante la accionada un derecho de petición que reiteró mediante escrito del 16 de julio siguiente, en el cual solicitó una explicación de los motivos por los cuales no se le permitió el ingreso a la asamblea general celebrada el pasado 27 de junio.

2.3 Sin embargo, la fecha de presentación de la tutela no ha recibido ninguna respuesta a su pedimento lo que, en su consideración, transgrede sus garantías constitucionales.

3. Con apego a lo anterior, solicitó se ordene a la entidad accionada, resolver la solicitud presentada.

4. La accionada y las vinculadas se notificaron en debida forma de la presente acción constitucional, y dentro del término concedido contestaron los requerimientos del despacho.

II. CONSIDERACIONES

1. Decantado está que el hecho superado *“tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.”*¹

2. Descendiendo al caso en concreto, se observa que la accionante pretende que por esta vía constitucional se le ordene a la parte convocada, contestar la petición radicada el 30 de junio de 2020 y reiterada el 16 de julio siguiente, mediante la cual solicitó una explicación de los motivos por los cuales no se le permitió el ingreso a la asamblea general celebrada el pasado 27 de junio.

Analizado el escrito de contestación y los anexos allegados por el presidente del consejo de administración del Edificio Bosques II, se observa que a través de comunicación electrónica del 20 de agosto de 2020 contestó la petición elevada por la actora, la cual ya había sido respondida previamente mediante correo electrónico enviado el pasado 23 de julio.

En efecto, la respuesta resuelve de fondo, de forma clara y congruente la petición elevada, pues allí, se le explicó que en ningún momento se advirtió su solicitud para el ingreso a la sesión, sumado a que la misma no requería contraseña alguna para el acceso. En todo caso, se le requirió aportar las evidencias de lo sucedido lo cual no realizó la petente

Adicionalmente, de los documentos allegados se observa la captura de pantalla de la remisión de dicha respuesta el 20 de agosto del cursado año y la del pasado 23 de julio, al correo electrónico pmartinezgamarra@yahoo.com, el cual se registró en el escrito de tutela como dirección electrónica de la señora Patricia Martínez Gamarra, lo que permite inferir que efectivamente fue remitida a la dirección de notificación de la actora.

Así las cosas, actualmente no existe vulneración al derecho fundamental invocado por la tutelante por la parte accionada, tal y como se expuso en precedencia, por lo cual se declarará la ocurrencia de la figura del hecho superado en atención a que, como instrumento constitucional de defensa del derecho fundamental que se dice conculcado, perdió su razón de ser, resultando ineficaz, ante la inexistencia actual de omisión por parte de la accionada.

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-085 de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá D. C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

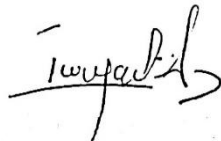
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional promovido por **PATRICIA MARTÍNEZ GAMARRA**, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta determinación a las partes intervinientes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: DETERMINAR que, en caso de no ser impugnado el fallo, se envíe a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, según lo establecido en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,



IRMA DIOMAR MARTÍN ABAUNZA

OL